Virgilio Acuña Peralta*

DEBATE SOBRE LÍMITES A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA AGRÍCOLA.

Es saludable para el país que se haya iniciado el debate sobre límites a la propiedad de la tierra. En un estado de derecho, social y democrático, es bueno que afloren las diversas posiciones, pues el debate enriquece el conocimiento.

En noviembre de 2011, presenté el proyecto de ley N° 545/2011-CR, “Ley de Democratización de las tierras agrícolas” en cuyo artículo 4º proponemos poner un límite de 25 mil hectáreas a la propiedad de la tierra. Desde inicios de la década pasada hay un proceso de reconcentración de las tierras en el país, sobre todo en la costa y hoy 34 empresas tienen en propiedad 225,657 hectáreas.

Si seguimos ese rumbo, sin poner límites a la propiedad de la tierra, en pocos años nos encontraremos en una situación en la que los grandes grupos económicos dedicados a la producción agraria para la exportación y producción industrial, tengan una posición de dominio, de poder, que pondrá en peligro la soberanía y seguridad alimentaria.

Las grandes inversiones en el agro, no orientan la producción para el consumo local y hemos escuchado recientemente la posición de un especialista que sostiene *“los inversionistas requieren mayores cantidades de tierra para mejorar la productividad y rentabilidad, requiriendo mayor cantidad de tierras para la siembra de caña de azúcar para destinar a la producción de etanol”*, es decir orientar la producción agraria hacia la industria del combustible.

El Presidente de ADEX, Juan Varillas Velásquez, expresó que poner límites a la propiedad *“reducirá drásticamente la competitividad en el sector agrario”* y *“generarán iniciativas similares para establecer límites a la propiedad de las tierras en el desarrollo de otras actividades como las mineras, petroleras, forestales, entre otras”* (<http://aeronoticias>, 20.01.12)

Lo que no se advierte y no se dice es que la Ley N° 27630 “Ley que aprueba normas de promoción del sector agrario” (vigente desde el 31.10.2000), establece un régimen especial para los trabajadores agrícolas así como una serie de beneficios tributarios, para quienes invierten en el sector agrario.

La competitividad en el sector agrario no está vinculada necesariamente a la extensión de las tierras, pues si hacemos una operación matemática de división de las 225,657 hectáreas entre los 34 propietarios, tenemos que en promedio la propiedad de las tierras es 6,635 hectáreas, menor de las 25 mil hectáreas que es el límite que proponemos. La competitividad de la agro exportación está vinculado, en otros factores, al impuesto a la renta ya que sólo pagan el 15% a diferencia de las empresas del régimen privado que pagan el 30%; para efectos del pago del impuesto a la renta les está permitido depreciar hasta en un 20% anual por inversiones de obras en infraestructura hidráulica y riego. De esta manera se les está permitido recuperar anticipadamente el IGV por adquisición de bienes de capital, insumos, servicios, y contratos de construcción, por espacio de 5 años, que es la etapa reproductiva de las inversiones. Todos estos beneficios están contenidos en los artículos 4 y 5 de la Ley 27360 y están vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2021.

En consecuencia, no es verdad que la extensión de la tierra esté vinculada necesariamente a la competitividad, en el caso de las empresas agroexportadoras, sino son los beneficios tributarios y el régimen especial del que gozan, lo que los hace competitivos en el mercado, beneficios que gozarán hasta el 31 de diciembre de 2021.

Tampoco es cierto que el límite a la propiedad de la tierra generará iniciativas similares; pues las actividades mineras, petroleras y forestales tienen mecanismos de otorgamiento de concesiones que se rigen por cuadrículas y lotes que están predeterminados.

En consecuencia, mi propuesta legislativa, respaldada por el Ministro de Agricultura Luis Ginocchio quien manifestó estudiar este tema, señaló que buscar un equilibrio razonable entre la productividad y rentabilidad, no ahuyentará las inversiones en el campo y tampoco se dejará de ser competitivos en el mercado internacional de exportación.

Finalmente preciso que el proyecto de democratización de las tierras que pone límites a la propiedad agraria, es constitucional, porque así lo establece el artículo 88 de la Constitución.